JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE TURBACO - BOLIVAR.- Septiembre veinticinco (25) de Dos Mil veintitrés (2023).-

AUTO INTERLOCUTORIO No. 0536

REF: Demanda Especial de Imposición de Servidumbre Legal Minera, promovida por AGM DESARROLLOS S.A.S., a través de su representante legal, contra DIDIER HUMBERTO LONDOÑO NARVAEZ, radicada con el Nro. 13-836-31-03-001-2022-00026-00.

Visto el informe secretarial que antecede, procede el Despacho a pronunciarse en cuanto Derecho se refiere respecto de las distintas situaciones pendientes de resolver, siendo la primera la solicitud de control de legalidad, presentada por la apoderada de la parte demandada, Dra. MERCEDES ORTIZ ESCOBAR, respecto del trámite que se le está dando al presente proceso, que según su dicho, no es el que corresponde; ello, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES:

Sea oportuno resaltar lo consagrado en el Art. 132 del Código General del Proceso, quien preceptúa:

“Agotada cada etapa del proceso el juez deberá realizar control de legalidad para corregir o sanear los vicios que configuren nulidades u otras irregularidades del proceso, las cuales, salvo que se trate de hechos nuevos, no se podrán alegar en las etapas siguientes, sin perjuicio de lo previsto para los recursos de revisión y casación”. (Negrillas y Subraya del Despacho).-

Al amparo de la anterior disposición es necesario y obligatorio, en ésta etapa del presente proceso, ejercer un **CONTROL DE LEGALIDAD**, en aras de corregir o sanear vicios que configuren **nulidades o irregularidades** del presente proceso.-

Previo análisis realizado al presente proceso, el Despacho es del criterio, que se incurrió en una irregularidad que puede afectar el debido proceso, como lo es el haber omitido el acuerdo a que deben llegar las partes sobre el valor de la indemnización con motivo del ejercicio de la servidumbre y/o avalúo de perjuicios en favor del propietario, poseedor u ocupante del terreno sirviente en este asunto.-

Detalla el Despacho, que pese ha haberse presentado una propuesta por parte de la firma demandante, en cuanto a la aludida indemnización, ésta no fue avalada por el demandado; simplemente, se guardó silencio y ello no representa de ninguna manera un acuerdo al respecto.-

Así las cosas, es preciso traer a colación lo señalado en el Art. 3 de la Ley 1274 de 2009, que a la letra reza:

“.....Artículo 3°. Solicitud de avalúo de perjuicios. Agotada la etapa de negociación directa sin que hubiere acuerdo sobre el valor de la indemnización que deba pagarse por el ejercicio de las servidumbres o sin que hubiere sido posible dar el aviso formal al propietario, poseedor u ocupante de los terrenos o al dueño de las mejoras, por lo menos dos (2) veces durante los veinte (20) días anteriores a la solicitud de avalúo de perjuicios, el interesado presentará ante el Juez Civil Municipal de la jurisdicción donde se encuentre ubicado el inmueble, la solicitud del avalúo de los perjuicios que se ocasionarán con los

trabajos o actividades a realizar en ejercicio de las servidumbres de hidrocarburos, la cual contendrá los siguientes requisitos:

1. Nombre y prueba de existencia y representación del interesado.
2. Copia del título o documento en el que consten los derechos a explorar, explotar o transportar hidrocarburos del interesado.
3. Ubicación del inmueble o predio objeto de las servidumbres de hidrocarburos y la identificación del área a ocupar permanente o transitoriamente con los trabajos de exploración, explotación y transporte de los hidrocarburos, sus linderos y la extensión de la misma.
4. Identificación y descripción de las construcciones, cercas, cultivos, plantaciones, pastos y mejoras que resulten afectadas con la ocupación y el ejercicio de las servidumbres de hidrocarburos.
5. Constancia de la entrega del aviso o prueba de la imposibilidad de su entrega.
6. Descripción de las actividades a adelantar en los terrenos a ocupar.
7. Identificación del dueño u ocupante de los terrenos o de las mejoras y lugar donde puede ser notificado de la solicitud.
8. Recibo de consignación a órdenes del Juzgado de la suma correspondiente al valor del avalúo comercial realizado por el Instituto Agustín Codazzi o por un profesional adscrito a una agremiación de lonja de la jurisdicción del predio debidamente reconocida, como depósito judicial a favor del propietario, poseedor u ocupante de los terrenos o de las mejoras por los perjuicios a ocasionar con la ocupación y ejercicio de las servidumbres.
9. Copia del acta de la negociación fallida.” (negritas del Despacho).-

Por su parte el Art. 4 de la misma Ley, establece:

“.....Artículo 4°. Autoridad competente para conocer la solicitud de avalúo. La autoridad competente para conocer de las solicitudes de avalúo para las servidumbres de hidrocarburos que adelante cualquier persona, natural o jurídica, nacional o extranjera y las sociedades de economía mixta, **será el Juez Civil Municipal de la**

jurisdicción donde se encuentre ubicado el inmueble que deba soportar la servidumbre.” (negritas del Despacho).-

Asimismo, el art. 5 de la misma Ley, que habla del trámite que debe dársele a esta clase de acciones judiciales, establece en su numeral 9; a saber:

*“..... 9. Cualquiera de las partes **puede pedir ante el Juez Civil del Circuito de la jurisdicción a la que pertenezca el predio objeto de la diligencia de avalúo, la revisión del mismo dentro del término de un (1) mes contado a partir de la fecha de la decisión del Juez Civil Municipal.”*** (negritas del Despacho).-

Del articulado en cita se desprende sin dubitación alguna, que la jurisdicción correspondiente para dirimir esta clase de acciones, como en el caso concreto, la solicitud de avalúo de perjuicios con motivo de la imposición de la servidumbre minera que pretende la firma demandante sobre el bien del demandado, es la del Juez Civil Municipal donde se encuentre ubicado el inmueble.-

Corolario de lo anterior, es palpable la irregularidad presentada dentro de este asunto, en razón a que este Despacho asumió la competencia, no siendo el competente para ello, surgiendo la necesidad de ejercer control de legalidad de conformidad a la norma inicialmente citada (art. 132 C.G.P.) y subsanar a tiempo el error en que se incurrió, por lo que correspondería, de acuerdo a la ubicación del bien inmueble objeto de demanda, remitir la presente actuación al Juez Civil Promiscuo Municipal en turno de esta Población.-

De otro lado, es oportuno aclarar que la presente Ley 1274 de 2009, hace referencia al procedimiento de avalúo para las

servidumbres petroleras, pero la misma fue citada, en esta ocasión, para dirimir la solicitud que hoy ocupa la atención del Despacho, como lo es la necesidad de ejercer un control de legalidad, por factor competencia, como se ha venido planteando, ya que el Art. 27 de la Ley 1955 de 2019, así lo permite, cuando reza:

*“.....**ARTÍCULO 27. SERVIDUMBRE MINERA.** El procedimiento para la imposición de servidumbres mineras será el previsto en la Ley 1274 de 2009.”*

Por lo antes expuesto, el Despacho en aras de subsanar la anterior falencia o irregularidad, procederá a decretar la nulidad de todo lo actuado, por competencia, y en su defecto procederá a remitir el presente asunto al Juzgado Promiscuo Municipal en turno de esta Localidad de Turbaco, Bolívar, jurisdicción a donde pertenece el inmueble objeto de demanda.-

De otro lado, se dará por notificado al demandado, como consecuencia de la gestión de notificación prestada por la parte actora, al igual que se ordenará dar por contestada la demanda por el demandado a través de apoderada judicial, a quien se le reconocerá personería jurídica.-

Por lo brevemente expuesto, el **JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE TURBACO- BOLIVAR,**

RESUELVE:

PRIMERO: DECRETAR LA NULIDAD de todo lo actuado dentro del presente asunto, de conformidad a lo esgrimido en la parte motiva de este proveído.-

SEGUNDO: Alléguese al proceso todas gestiones de notificación realizadas por la parte actora; en consecuencia, téngase por notificado al demandado.-

TERCERO: Por reunir los requisitos a que alude el Art. 96 del C.G.P., téngase por contestada la presente demanda por parte del demandado **DEDIER HUMBERTO LONDOÑO NARVAEZ**, a través de apoderada judicial.-

TERCERO: Tiénese a la Doctora **MERCEDES ORTIZ ESCOBAR**, identificada con la cédula de ciudadanía número 45.689.218 expedida en Cartagena y Tarjeta Profesional No. 217.239 del C.S. de la J., como apoderada judicial del demandado **DEDIER HUMBERTO LONDOÑO NARVAEZ**, en los términos y para los fines conferidos en dicho memorial Poder.-

CUARTO: Como consecuencia a lo señalado en el numeral primero, remítase el presente asunto al **JUZGADO PROMISCOU MUNICIPAL** en turno, de esta localidad, por competencia. Por secretaría gestiónese lo propio para su envío, a través de la Oficina de Apoyo Judicial de Cartagena, para su respectivo reparto.-

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Firmado Por:
Alfonso Meza De La Ossa
Juez
Juzgado De Circuito
Civil 001
Turbaco - Bolivar

conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **e0d4f52ce980d0b2b4e74d0700a3582f19af1b73c891c0eefc4b9a874538e8ae**

Documento generado en 25/09/2023 04:54:32 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>